PROGRAMA CATALÀ DE PROTECCIÓ DE **DEFENSORS** I **DEFENSORES** DELS **DRETS HUMANS**

DH!

Informe de la visita de seguimento en Colombia

DEL 4 AL 14 DE MARZO DE 2023

Foto: Jenn Diaz

Informe elaborado por:

CEA(R) Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat

ACCD Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Generalitat de Catalunya

Abril, 2023

El Programa Catalan de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

El Programa Catalán de Protección a Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos (PCPDDH) tiene como objetivo ofrecer protección integral a defensores y defensoras de derechos humanos en situación de riesgo debido a su actividad en la defensa de los derechos humanos por medios pacíficos, mediante una acogida de 6 meses en Cataluña.

Está impulsado por el Departamento de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalidad de Cataluña, con el liderazgo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y la colaboración de la Secretaría de Igualdad y el Ayuntamiento de Sant Cugat. Está gestionado por la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado y se cuenta con la participación de entidades catalanas que se implican presentando las candidaturas de las personas defensoras y acompañándolas durante todo el proceso de acogida.

Objetivos de la delegación

La visita de la delegación catalana en Colombia ha tenido lugar del 4 al 14 de marzo de 2023 y se considera una acción estratégica en la apuesta del programa por una protección integral y duradera de los defensores y defensoras en riesgo. Ha tenido como objetivos:

- Hacer seguimiento de la situación personal y comunitaria de las personas defensoras que han sido acogidas en el PCPDDH.
- Fortalecer su red de protección y visibilizar el compromiso y apoyo de las instituciones, el Parlamento de Cataluña y las organizaciones sociales catalanas y europeas.
- Obtener información relevante de contexto tanto a nivel nacional como de los departamentos de Cauca, Antioquia y Meta y hacer seguimiento de la situación de vulneraciones de derechos humanos.

Integrantes de la delegación

- **Generalitat de Cataluña:** Yoya Alcoceba, directora general de Cooperación al Desarrollo, Marc Bou, responsable de Alianzas Internacionales, Marta Grau, responsable de Comunicación y Educación Gobal y Regina Ventura, técnica de Alianzas Internacionales, de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
- **Parlamento de Cataluña:** Jenn Diaz, diputada de Esquerra Republicana de Catalunya, Quim Jubert, diputado de Junts per Catalunya
- **Grupo parlamentario** Candidatura d'Unitat Popular: Isabel Chacón, equipo técnico.
- **Organizaciones catalanas:** Dilara Ekmen, codirectora y Constanza Schinteie técnica de incidencia política y social de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, Juan Ávila y Julia Matildelina Ortiz miembros del Colectivo Maloka, Natàlia Pelegrí, técnica de la Asociación Acción Internacional por la Paz.

Organizaciones y personas defensoras visitadas

- **Departamento del Norte del Cauca:** César Galarza, comunicador de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y Katherin Arias, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) – Capítulo Bogotá, participantes en el año 2022 y Alicia Valencia, guardia indígena y miembro de ACIN, participante en 2019.
- **Departamento de Antioquia:** Milena Florez, presidenta del Movimiento Rios Vivos Antioquia, participante en el año 2019.

- **Departamento del Meta:** Diana Martínez, secretaria de la Asociación Campesina de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas de la región del río Cafre (AGROCAFRE) y miembro de Fundación por la defensa de DDHH y DIH en Oriente y Centro de Colombia (DHOC), participante en 2022 y Edilberto Daza, presidente de la Fundación DHOC, participante en 2017.
- **Nacional:** Luz Marina Hache, miembro del MOVICE, participante en 2021.

Encuentros y reuniones mantenidas en Colombia

En un primer momento la delegación se divide y posteriormente se une en Bogotá.

Norte del Cauca (del 4 al 7 de marzo)

- Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)
- Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)
- Autoridades indígenas de Corinto y Cerro Tijeras

Antioquia (del 4 al 7 de marzo)

- Movimiento Ríos Vivos
- Asamblea de Antioquia
- Gobernación de Antioquia
- Alcaldía de Medellín
- Empresas Públicas de Medellín

Bogotá (del 8 al 11 de marzo)

- MOVICE
- Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
- Dirección de DH, Ministerio del Interior
- Dirección de DH, Ministerio de Defensa
- Defensoría del Pueblo
- Fiscalía General de la Nación
- Sistema Integral de Verdad, Justícia, Reparación y No Repetición
- Unidad Nacional de Protección
- OACNUDH

Meta (del 12 al 13 de marzo)

- Asociación Campesina AGROCAFRE
- Fundación DHOC
- Gobernación de Antioquia
- Alcaldía de Medellín
- Colectivo Orlando Fals Borda
- Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

Contexto nacional de la situación de derechos humanos

Durante 2021 y 2022 ha habido un grave deterioro de la situación humanitaria, lo que ha generado un aumento de los desplazamientos colectivos, confinamientos, masacres, asesinados a defensores y defensoras de derechos humanos y firmantes de paz.

Según Human Right Watch desde 2016, año en el que se firma el Acuerdo de Paz, más de 400 defensores y defensores de derechos humanos han sido asesinados. Desde la desmovilización de las FARC-EP, distintos grupos armados se disputan el control del territorio, generando una escalada de violencia y violaciones de los derechos humanos.

Según Indepaz, durante 2022 han sido asesinados 189 líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. En 2021, Somos Defensores registró 996 agresiones individuales, siendo el año más violento en los últimos 12 años. Las detenciones arbitrarias aumentaron un 73% y los robos de información un 25%.

El 2021 fue el año con el mayor número de víctimas de desplazamiento forzado en 5 años; más de 82.000 personas fueron desplazadas, siendo las mayores afectadas personas afrodescendientes e indígenas. Según Indepaz, en 2022 se cometieron 94 masacres con 300 víctimas, con mayor afectación a los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Antioquía y Norte de Santander.

Observación de la situación de derechos humanos y de las defensoras y defensores

Norte del Cauca

Se ha visitado a la **Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cáuca (ACIN) - Çxhab Wala Kiwe**, organización que cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la reivindicación de los derechos territoriales y políticos del Poble Nasa. Fue creada en 1994, congrega a más de quince cabildos de la región y pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La orientación de la ACIN durante los últimos años ha sido el desarrollo de planes de vida y estrategias de resistencia al conflicto armado.

Durante la visita también ha habido reuniones con el CRIC y las Autoridades indígenas de Corinto y Cerro Tijeras. Se ha compartido algunos de los espacios con la OACNUDH y el PNUD, ya que tienen varios proyectos de apoyo a ACIN y el CRIC. También se mantuvo una reunión con la Fundación Ensayos.

Durante la visita se observa:

- Aumento de conflictividad en el territorio debido a la disputa de los actores armados por los intereses estratégicos de control territorial, los monocultivos y las economías de uso ilícito.
- Los enfrentamientos armados, los desplazamientos forzados, los controles en carretera por grupos armados ilegales, los secuestros, y la cifra que no merma de asesinatos líderes y defensoras de derechos humanos hacen que esta región viva en una grave crisis humanitaria.
- Una de las mayores preocupaciones de la comunidad indígena vuelve a ser el reclutamiento forzado de sus jóvenes, niños y niñas que, según el Informe de 2021 de Desarmonías de la ACIN, 272 niñas, niños y jóvenes han sido reclutados por los grupos armados. En 2021 también tuvieron lugar 58 homicidios, 3 masacres, 23 atentados, 68 amenazas a líderes indígenas y 64 combates en los territorios indígenas.
- Con grave preocupación y dolor se destaca el asesinato de los últimos años de autoridades indígenas Tuthenas de la ACIN entre los que se encuentran: Miller Correa, Gerson Acosta, Edwin Dagua, Cristina Bautista, Liliana Peña, David Guegue y Argenis Yatacué.
- A pesar de la grave situación en materia de conflicto armado y violaciones a los DDHH en el Norte del Cauca, ACIN y su organización regional el CRIC, son un importante proceso organizativo en la defensa de la Vida, el territorio y los derechos de los Pueblos Indígenas.

Antioquia

Se ha visitado el **Movimiento Rios Vivos (MRV)**, espacio de coordinación de quince asociaciones de mujeres, jóvenes, *barequeros* y *barequeras*, pescadores, agricultores, cocineras, amas de casa y comerciantes, afectados por el megaproyecto de la represa de Hidroituango, y en riesgo de desplazamiento por la precariedad económica que ocasionó la pérdida de su apoyo de vida y por el peligro de inundaciones que puedan provocar nuevas contingencias de la presa.

También se han mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la Empresa Pública de Medellín (EPM) donde se les ha trasladado la preocupación ante la compleja situación de derechos humanos en que se encuentran las comunidades afectadas por el megaproyecto.

Durante la visita se observa:

- Aumento de la violencia en el territorio, presencia de distintos grupos armados y crecimiento del reclutamiento de menores. Además, las amenazas a personas de la organización se mantienen, lo que supone un riesgo para continuar con su labor de defensa de la vida y el medio ambiente.
- El 13 de mayo de 2021 se instaló una mesa de negociaciones entre el Ayuntamiento de Medellín, EMP y MRV para buscar soluciones a las problemáticas de la región. Se destaca que quedan por cumplir muchos de los compromisos de apoyo a proyectos productivos de las comunidades afectadas.

- Las comunidades destacan el riesgo que supone por poner las turbinas en movimiento. Tras la contingencia de 2018, cuando las aguas desbordaron a Hidroituango con graves consecuencias (15.000 personas evacuadas) se teme que se pueda generar un nuevo desastre.

- Las comunidades muestran su preocupación frente a los daños ecológicos y ambientales provocados por la hidroeléctrica y la pérdida de la subsistencia de vida cuando históricamente han vivido del río y de la tierra. Preocupa también especialmente, la afectación psicosocial de las comunidades.

- MVR lleva años denunciando la falta de verdad y la falta de voluntad por la búsqueda de personas desaparecidas forzosas en la región debido al conflicto armado. Se está esperando una audiencia para encontrar a las personas desaparecidas en áreas sumergidas. Por ahora está parado mediante un recurso de EPM.

Meta

Se ha visitado en **AGROCAFRE**, organización que agrupa a 17 Juntas de Acción Comunal ubicadas en el río Cafre, departamento del Meta. Trabaja por tener mecanismos colectivos de supervivencia ante las graves vulneraciones de derechos humanos vividas en el territorio. También se ha visitado en la **Fundación DHOC** que promueve la creación y coordinación de más de 400 Comités Veredales de DDHH. Tiene como objetivo capacitar y acompañar a las comunidades campesinas en mecanismos de autoprotección y recoger y tramitar denuncias de vulneraciones de derechos de las comunidades.

También se ha mantenido una reunión conjunta con instituciones, organismos internacionales y organizaciones sociales ubicadas en Villavicencio: la Gobernación del Meta, la Defensoría del Pueblo, la OACNUDH Regional Meta, el Consejo Noruego de Refugiados y la Corporación Justicia y Democracia.

Además, la delegación participó en la visita institucional de la Generalidad de Cataluña en Villavicencio conformada por una delegación de alto nivel del gobierno de Cataluña, con la participación de Pere Aragonès, Presidente de Cataluña y Meritxell Serret i Aleu, Consejera de Acción Exterior y Unión Europea. Se hizo un acto de memoria a las víctimas del conflicto armado en el cementerio de Villavicencio, con varias organizaciones como la Fundación DHOC y Orlando Fals Borda.

Durante la visita se observa:

- Existe un aumento de la estigmatización, persecuciones, amenazas y montajes judiciales hacia las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos.

- Existe una reactivación del conflicto armado en los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare y una reorganización de los grupos armados afectando a la población. Muchas veces los grupos armados realizan ataques y vulneraciones de derechos humanos en puntos cerca de donde está ubicada la fuerza pública.

- Se destacan las graves afectaciones a la población en relación con la operación militar Artemisa. Si bien ahora con el cambio de gobierno se ha detenido, se manifiesta la necesidad de reparar a las víctimas que han sido judicializadas y desplazadas.

- Se solicitan garantías para la implementación del Plan de Sustitución de cultivos de uso ilícito, tanto por las personas trabajadoras como por las comunidades.
- Es necesario el apoyo a los mecanismos de protección y autoprotección de las propias comunidades y organizaciones sociales, destacando:
  - ✓ Fortalecimiento de la figura de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y la implementación de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS). En concreto: ampliación de la ZRC Guejar - Cafre e implementación de su PDS y la elaboración del PDS de la ZRC Lozada Guayabero.
  - ✓ Reconocimiento de la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano por los procesos agrarios, ambientales y sociales – COSCOPAAS-, como mecanismo de articulación propia para impulsar la agenda ambiental en la región.
  - ✓ Reconocimiento de la Guardia Ambiental Campesina por parte de las instituciones y organismos de la región.

Bogotá

Se ha visitado en el **Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE**, organización que fundamenta su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos y los derechos de las víctimas y orienta su acción social hacia la búsqueda de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, despojo, entre otros hechos victimizantes, cuyos autores son agentes del Estado y/o estructuras paramilitares.

Durante la visita se observa:

- El nuevo gobierno apuesta por dejar instaladas unas reformas que permitan generar cambios a largo plazo, si viene hay muchos retos debido a la situación del conflicto armado y las vulneraciones de derechos humanos existentes en los territorios y también en la ciudad de Bogotá.
- La preocupación hacía los y las jóvenes detenidas durante las protestas de la huelga nacional de abril de 2021, en el que hubo una fuerte represión y criminalización de la protesta.
- Se destaca la falta de respuesta adecuada de la UNP en relación con la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Hay lentitud y carencia de respuestas adecuadas. Se lamenta el intento de homicidio del director de la UNP el 8 de marzo.
- Ante el cambio de directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) se solicita tener un espacio con MOVICE y las víctimas.

- Es importante visibilizar la problemática de las víctimas del refugio y del exilio y se solicita que se reconozca el exilio como un hecho victimizante.
- Se pide el desmantelamiento del ESMAD, que es a lo que se comprometió el gobierno de Gustavo Petro, en vez del cambio de nombre que se le ha hecho: Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UMDO).
- Es necesaria la implementación del Acuerdo de Paz y la finalización del conflicto armado en Colombia.
- Es necesario visibilizar que los grupos paramilitares siguen operando en los territorios, más allá del control del narcotráfico, son una estrategia de control territorial y de recursos.

También se han mantenido **reuniones con instituciones colombianas de ámbito nacional y organismos multilaterales**, en las que ha participado toda la delegación y defensores visitados. Se ha realizado reuniones con: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Dirección de DDHH del Ministerio del Interior, Dirección de DH del Ministerio de Defensa, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, Unidad Nacional de Protección y OACNUDH.

A raíz de las reuniones mantenidas se observa:

- A pesar del cambio político en Colombia, que permitirá impulsar políticas públicas orientadas a la implementación de los acuerdos de paz y al ejercicio de defensa de los DDHH, se perciben muchos retos de antemano y que las transformaciones serán lentas.
- La presencia de grupos armados en los territorios y su lucha por el control territorial y por los recursos los sitúa en el punto de mira, como mecanismo para desarticular a las organizaciones sociales y las comunidades.
- Ante estos retos se destaca la apuesta del nuevo gobierno por la Paz Total, el enfoque de seguridad humana y la protección de las DDH y líderes y lideresas sociales. En los encuentros con las instituciones competentes, nos han trasladado la necesidad de impulso de medidas concretas como:
  - ✓ La articulación de un plan de emergencia por personas defensoras de los DH.
  - ✓ La elaboración de la Política pública de Derechos Humanos, liderada por la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos, que estará basada en la protección colectiva, la dotación por las iniciativas de autoprotección comunitaria (guardias) y los refugios humanitarios.
  - ✓ La reactivación de las Tablas de Garantías en municipios priorizados por el alto nivel de violencia.
  - ✓ El Programa Integral de Garantías para mujeres defensoras liderado por la Dirección de DH del Ministerio del Interior
  - ✓ La reestructuración de la Unidad Nacional de Protección y la priorización de las rutas de protección colectiva, con enfoque diferencial (étnico y de género).

Informe elaborado por:

Con el apoyo de: